

Informe en relació amb el Projecte de decret pel qual es crea i regula el Registre de persones professionals sanitàries objectores de consciència en la intervenció directa en la pràctica de la interrupció voluntària de l'embaràs (IVE)

Antecedents

Es presenta davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades el Projecte de decret pel qual es crea i regula el Registre de persones professionals sanitàries objectores de consciència en la intervenció directa en la pràctica de la interrupció voluntària de l'embaràs (IVE), per tal que l'Autoritat emeti el seu parer.

El Projecte de decret es compon d'un preàmbul, 8 articles i una disposició final.

S'acompanya el Projecte de decret de la memòria general, de la memòria d'avaluació de l'impacte de les mesures proposades i de l'informe jurídic preliminar.

Analitzat el Projecte de decret i l'expedient que l'acompanya, vista la normativa vigent aplicable, i d'acord amb l'informe de l'Assessoria Jurídica, s'informa del següent.

Fonaments Jurídics

I

(...)

II

D'entrada, escau fer esment al marc normatiu en què s'insereix el Projecte de decret que se sotmet a informe.

La Llei orgànica 1/2023, de 28 de febrer, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2010, del 3 de març, de salut sexual i reproductiva i d'interrupció voluntària de l'embaràs, introdueix diverses modificacions per garantir l'efectiva vigència dels drets sexuals i reproductius de les dones.

Destaquen, als efectes que interessin, l'addició dels articles 19 bis i 19 ter, els quals disposen el següent:

“Artículo 19 bis. Objeción de conciencia.

1. Las personas profesionales sanitarias directamente implicadas en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo podrán ejercer la objeción de conciencia, sin que el ejercicio de este derecho individual pueda menoscabar el derecho humano a la vida, la salud y la libertad de las mujeres que decidan interrumpir su embarazo.

El rechazo o la negativa a realizar la intervención de interrupción del embarazo por razones de conciencia es una decisión siempre individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe manifestarse con antelación y por escrito.

La persona objetora podrá revocar la declaración de objeción en todo momento por los mismos medios por los que la otorgó.

2. El acceso o la calidad asistencial de la prestación no se verán afectados por el ejercicio individual del derecho a la objeción de conciencia. A estos efectos, los servicios públicos se organizarán siempre de forma que se garantice el personal sanitario necesario para el acceso efectivo y oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo. Asimismo, todo el personal sanitario dispensará siempre tratamiento y atención médica adecuados a las mujeres que lo precisen antes y después de haberse sometido a una interrupción del embarazo.

Artículo 19 ter. Registros de personas objetoras de conciencia.

1. A efectos organizativos y para una adecuada gestión de la prestación se creará en cada comunidad autónoma y en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) un registro de personas profesionales sanitarias que decidan objetar por motivos de conciencia respecto de la intervención directa en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo.

2. Quienes se declaren personas objetoras de conciencia lo serán a los efectos de la práctica directa de la prestación de interrupción voluntaria del embarazo tanto en el ámbito de la sanidad pública como de la privada.

3. En el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se acordará un protocolo específico que incluya las condiciones mínimas para garantizar el cumplimiento de los objetivos perseguidos con la creación de este Registro, junto a la salvaguarda de la protección de datos de carácter personal, conforme a lo previsto en la disposición adicional cuarta.

4. Se adoptarán las medidas organizativas necesarias para garantizar la no discriminación tanto de las personas profesionales sanitarias no objetoras, evitando que se vean relegadas en exclusiva a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, como de las personas objetoras para evitar que sufran cualquier discriminación derivada de la objeción.”

Així mateix, destaquen les previsions de la Disposició addicional quarta d'aquesta Llei orgànica, a què remet expressament el seu article 19 ter, apartat 3, que disposa el següent:

“Disposición adicional cuarta. Protección de datos de carácter personal en los Registros de personas objetoras de conciencia.

1. Los datos personales que contengan los Registros de personas objetoras de conciencia regulados en el artículo 19 ter se llevarán a cabo conforme a lo dispuesto en

el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

2. El fundamento jurídico de legitimación para el tratamiento de los datos que recoja el Registro de personas objetoras, de acuerdo con su objetivo y finalidad, se encuentra en las letras g) e i) del apartado 2 de los artículos 9 y concordantes del Reglamento General de Protección de Datos, así como en las letras c) y e) del apartado 1 de su artículo 6.

3. Los datos de las personas objetoras recogidos en cada uno de los Registros serán aquellos que resulten estrictamente necesarios para identificar al personal sanitario que desarrolle su actividad en centros sanitarios acreditados para la realización de la interrupción voluntaria del embarazo cuyas funciones conlleven su participación directa en las citadas intervenciones. Los datos objeto de tratamiento deberán ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son recogidos, no debiendo incluirse, en ningún caso, el motivo de la objeción.

4. La finalidad perseguida con el tratamiento de los datos recabados en virtud del artículo 19 ter es la garantía de la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo, adecuando los recursos humanos a la correcta programación de las intervenciones de interrupción voluntaria del embarazo. Los datos no podrán ser utilizados en ningún caso con fines distintos a los establecidos en este precepto.

5. Son responsables del tratamiento las Consejerías competentes en materia de sanidad de las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), de acuerdo con sus respectivos ámbitos competenciales.

6. Las personas titulares de las Direcciones o Gerencias de los centros sanitarios acreditados para la realización de la interrupción voluntaria del embarazo tienen la consideración de destinatarias de los datos que sean estrictamente necesarios para la correcta planificación del servicio. Asimismo, tendrán esta condición respecto de los datos personales que sean estrictamente necesarios para conocer el número de personas objetoras en cada centro sanitario, acreditado quienes sean responsables de planificar los recursos humanos en cada Comunidad Autónoma y en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), con el fin de garantizar la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo.

7. Las personas responsables y encargadas del tratamiento, así como todas las personas que intervengan en cualquier fase del mismo, estarán sujetas al deber de confidencialidad regulado por el artículo 5.1.f) del Reglamento general de protección de datos, sin perjuicio de los deberes de secreto profesional que, en su caso, resulten de aplicación.

8. La recolección de datos se hará conforme a la legislación vigente, con especial atención a:

a) La confidencialidad y la autenticidad de la identificación de la persona titular de los datos mediante certificado electrónico o instrumento similar de identificación segura.

b) El cumplimiento del deber de información previa a los interesados en los términos previstos en el artículo 13 del Reglamento general de protección de datos.

9. De acuerdo con la finalidad del tratamiento, se conservarán los datos recogidos durante el tiempo necesario para el cumplimiento del fin para el cual fueron recogidos y, en su caso, podrán conservarse, debidamente bloqueados, por el tiempo necesario para atender a las responsabilidades derivadas de su tratamiento ante los órganos

administrativos o jurisdiccionales competentes. Una vez transcurrido dicho periodo de conservación, los datos serán suprimidos definitivamente.

10. Las administraciones públicas que sean responsables del tratamiento deberán implementar la protección de datos desde el diseño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 del Reglamento general de protección de datos, realizando, desde el momento de la concepción del tratamiento, el correspondiente análisis de riesgos y evaluación de impactos para determinar las medidas técnicas y organizativas adecuadas. Estas medidas garantizarán los derechos y libertades de la persona interesada, así como la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad de los accesos a los datos, teniendo en cuenta, en todo momento, lo previsto en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.

11. La persona titular de los datos podrá ejercer todos los derechos regulados en los artículos 13 a 22 del Reglamento General de Protección de Datos, excepto el de oposición, al basarse el tratamiento en el cumplimiento de una obligación legal, conforme al artículo 6.1.c) del Reglamento General de Protección de Datos.”

El Projecte de decret que ara s'examina respon al mandat de l'article 19 ter de la Llei 2/2010, abans transcrit.

En aquest sentit, té per objecte crear i desplegar normativament el Registre de persones professionals sanitàries objectores de consciència en la intervenció directa en la pràctica de la interrupció voluntària de l'embaràs (en endavant, el Registre de persones objectores de consciència) en l'àmbit de Catalunya (article 1).

Destacar, des del punt de vista de la protecció de dades personals, que les dades relatives a l'objectió de consciència dels professionals sanitaris, en la mesura que son un reflex d'opinions o conviccions religioses o filosòfiques, han de considerar-se dades de categories especials de protecció en els termes de l'article 9 de Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i del Consell Europeu, de 27 d'abril de 2016, General de Protecció de Dades (RGPD).

També que el tractament d'aquestes dades que es contenen en el Registre de persones objectores de consciència, en atenció a la finalitat a què respon, es considera legitimat sobre la base dels articles 6.1.c) i e) i 9.2.g) i i) de l'RGPD, tal com es recull a l'apartat 2 de la Disposició addicional quarta de la Llei 2/2010 (en endavant, DA 4a), també transcrita.

En tot cas, la regulació del dit Registre haurà d'adequar-se al marc normatiu bàsic esmentat i, particularment, als efectes que interessin, a les previsions de la DA 4a de la Llei 2/2010.

És en aquest context que examinarem, a continuació, les previsions del Projecte de decret. Abans però, escau valorar positivament que en la seva elaboració s'hagi observat el principi de minimització de dades (article 5.1.c) RGPD), atesa la importància de tenir en compte la protecció de dades des del disseny i per defecte tant en el moment de definir les diferents operacions de tractament com a l'hora de determinar i aplicar els mitjans que s'utilitzaran per tractar les dades personals, tal com disposa l'article 25 de l'RGPD.

III

L'article 2 del Projecte de decret regula les finalitats a què respon el Registre de persones objectores de consciència.

Interessa fer esment a l'**apartat c)** d'aquest article 2, el qual disposa que el Registre té per finalitat "facilitar a les unitats competents en matèria de planificació sanitària del departament competent en matèria de salut i en matèria d'activitat assistencial del Servei Català de la Salut la informació sobre el nombre de persones professionals objectores de consciència en cada centre sanitari autoritzat per a la realització de la interrupció voluntària de l'embaràs per gestionar la correcta prestació sanitària pública amb criteris d'igualtat, equitat i qualitat assistencial."

L'apartat 4 de la DA 4a de la Llei 2/2010, en connexió amb l'article 19 ter de la mateixa Llei, limita la finalitat del tractament de les dades que es contenen en aquest tipus de registres a la "*garantía de la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo, adecuando los recursos humanos a la correcta programación de las intervenciones de interrupción voluntaria del embarazo. (...)*".

A tal efecte, l'apartat 6 de la DA 4a de la Llei 2/2010, en regular els accessos a aquests tipus de registres, limita l'accés a la informació sobre el nombre de persones objectores de consciència en cada centre sanitari a aquelles persones que siguin "**responsables de planificar los recursos humanos en cada Comunidad Autónoma (...), con el fin de garantizar la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo.**"

Vist això, fer notar que els termes emprats en l'article 2.c) del Projecte podrien portar a certa confusió sobre la finalitat a què respon el Registre, atès que no contempen cap referència als responsables de planificar els recursos humans del departament de salut i del CatSalut. Cal recordar que les dades que s'hi contenen no poden ser emprades en cap cas per a d'altres finalitats diferents a la indicada, en definitiva, a la LO 2/2010.

Per això, per tal d'evitar possibles equívocs, seria necessari **incorporar en aquest apartat c)** un incís per indicar que es tractaria en tot cas dels responsables de planificar els recursos humans, en línia a com es preveu a l'apartat 6 de la DA 4a de la LO 2/2010, citat.

En aquest sentit, es proposa la redacció següent:

"c) Facilitar a les unitats competents en matèria de planificació sanitària del departament competent en matèria de salut i en matèria d'activitat assistencial del Servei Català de la Salut, a qui els correspon la planificació dels recursos humans, la informació sobre el nombre de persones professionals objectores de consciència en cada centre sanitari autoritzat per a la realització de la interrupció voluntària de l'embaràs per gestionar la correcta prestació sanitària pública amb criteris d'igualtat, equitat i qualitat assistencial."

En coherència amb aquesta consideració, i vist allò disposat a l'apartat 6 de la DA 4a de la LO 2/2010 pel que fa a les persones destinatàries de la informació continguda en

aquest tipus de registres, també seria necessari **incloure aquest incís a l'article 6.2** del Projecte de decret.

Al seu torn, vist que l'accés al Registre pels responsables de planificar els recursos humans s'ha de limitar a la informació relativa al "nombre" de persones professionals objectores de consciència, també seria necessari **incloure aquest extrem a l'article 6.2** del Projecte de decret.

Recollint aquestes consideracions, es proposa **modificar l'article 6.2** en el sentit següent:

"2. Solament poden accedir, en l'àmbit de les seves competències, les persones responsables de les direccions o gerències dels centres sanitaris autoritzats per a la realització d'interrupcions voluntàries, per gestionar la correcta programació d'aquesta activitat, i les persones titulars de les unitats competents en matèria de planificació sanitària del departament competent en matèria de salut i d'activitat assistencial del Servei Català de la Salut, per gestionar la correcta prestació sanitària pública, sempre sota el principi de confidencialitat i limitat l'accés a la informació sobre el nombre de persones professionals objectores de consciència de cada centre sanitari autoritzat necessària per complir amb les seves funcions de planificació dels recursos humans."

IV

L'article 3 del Projecte de decret regula l'àmbit objectiu i subjectiu del Registre en consonància amb les previsions de l'article 19 ter i la DA 4a de la LO 2/2010.

Cal valorar particularment de manera positiva la concreció de les persones professionals sanitàries afectades pel tractament de les seves dades personals, així com de les dades personals a incloure en la declaració d'objecció de consciència que serà objecte d'inscripció en el Registre (apartats 2 i 3), adequant-se les dites previsions al principi de minimització de dades (article 5.1.c) RGPD).

Tan sols apuntar que, per tal d'oferir una major transparència a les persones afectades (article 5.1.a) RGPD), seria convenient preveure que en la dita declaració no s'ha d'incloure, en cap cas, el motiu de l'objecció. Aquesta previsió certament està prevista a la part expositiva del Projecte de decret però, atesa la seva importància des del punt de vista del dret a la protecció de dades personals de les persones afectades, caldria incorporar-la també en el mateix articulat.

En aquest sentit, es proposa **afegir**, per exemple en **l'apartat 3 de l'article 3**, el següent text:

"La declaració d'objecció de consciència no ha d'incloure el motiu de l'objecció".

Per altra banda, també cal valorar positivament la previsió de **l'apartat 6 de l'article 3** de mantenir les dades identificatives, de contacte i professionals de les persones objectores així com les dades identificatives del centre de prestació de serveis registrades de manera permanentment actualitzada.

A tal efecte, s'estableix que "les persones professionals sanitàries objectores han de comunicar al Registre qualsevol canvi respecte d'aquestes dades contingudes en la declaració inscrita." També que es poden actualitzar "prèvia la tramitació d'un procediment incoat a l'efecte per l'òrgan del qual depèn el Registre si en la seva funció de verificació de les dades inscrites accedeix, amb subjecció a les normes de protecció de dades, a d'altres registres de l'Administració sanitària o dels col·legis professionals on consten altres dades diferents a les declarades (...)."

De la mateixa manera que s'ha previst aquesta potestat de verificació per part de l'òrgan gestor del Registre seria convenient, per tal de garantir el compliment efectiu del principi d'exactitud de les dades (article 5.1.d) RGPD), que el Projecte de decret preveïés també un **procediment d'actualització** de les dades relatives al centre on presten servei els professionals sanitaris objectors de consciència per al **supòsit en què aquests professionals no comuniquin**, quan escaigui, **el canvi de centre**, tenint en compte l'especial incidència que tindria mantenir aquesta informació de manera inexacta en el Registre per a la planificació de la prestació tant per part dels centres autoritzats com pel mateix departament.

Respecte a la facultat de verificar la certesa de les dades declarades per les persones afectades, s'estableix que la consulta, a aquests efectes, es durà a terme "amb subjecció a les normes de protecció de dades", per tant, cal entendre únicament en aquells casos en què es compti amb una base jurídica suficient (article 6.1.e) RGPD i article 8.2 LODPGDD). Fer notar, al respecte, que pot constituir una habilitació suficient les previsions de la disposició addicional vuitena de l'LOPDGDD.

En tot cas, recordar que és **necessari informar** les persones afectades d'aquesta possibilitat de verificació de les dades personals declarades, i de les seves conseqüències, a través, per exemple, d'un apartat específic en la sol·licitud d'inscripció de la declaració.

V

L'article 4 del Projecte de decret regula el procediment d'inscripció en el Registre.

Cal valorar positivament les previsions d'exigir l'ús de sistemes d'identificació i signatura electrònica per a la presentació de la sol·licitud d'inscripció de la declaració d'objecció al Registre (apartat 3) en línia amb allò establert a l'apartat 8.a) de la DA 4a de la LO 2/2010.

Recordar que la dita sol·licitud haurà **d'incorporar una clàusula informativa** per tal de donar compliment al deure d'informació prèvia a les persones afectades en els termes establerts a l'article 13 de l'RGPD.

VI

L'article 6 del Projecte de decret regula l'accés al Registre de persones professionals objectores de consciència i la possibilitat d'obtenció de certificats.

Cal valorar particularment de manera positiva que s'hagi previst el caràcter confidencial i no públic del Registre (apartat 1), limitant l'accés a les dades personals inscrites exclusivament a les persones legitimades en atenció a les funcions que tenen atribuïdes (apartat 2), sens perjudici de la consideració feta en el fonament jurídic III d'aquest informe, així com a les mateixes persones afectades (apartat 5).

També cal valorar positivament que s'hagi recollit la necessitat de subscriure un compromís de confidencialitat per part de les persones que tenen accés al Registre en relació amb la informació a què tinguin accés (apartat 4).

Sobre això, fer notar que la normativa de protecció de dades imposa a qualsevol persona que intervingui en el tractament de dades personals el deure de guardar-ne secret, obligació que subsisteix fins i tot després de finalitzar la relació que mantinguin amb el responsable del tractament (articles 5.1.f) RGPD i article 5 LOPDGDD). Per això, podria ser convenient **incloure un incís** en aquest sentit en aquest mateix **apartat 4**.

A tal efecte, es proposa la redacció següent:

“4. Les persones que hi puguin accedir en exercici de les seves funcions, han de subscriure un compromís de confidencialitat en relació amb la informació a què tinguin accés, restant subjectes al deure de secret, fins i tot un cop finalitzada la seva vinculació amb l'entitat per a la qual presten serveis.”

Per altra banda, en aquest article 6 també es preveu establir uns protocols d'accés al Registre per als responsables dels centres autoritzats per a la realització d'interrupcions voluntàries que han de garantir “la confidencialitat i la protecció de les dades personals” (apartat 3).

Aquestes previsions han de posar-se necessàriament en relació amb allò establert a **l'article 7.1** del Projecte de decret, a què fem esment tot seguit.

VII

L'article 7 del Projecte de decret disposa, en el seu **apartat 1**, el següent:

“1. El tractament de les dades que integren el Registre s'ha d'ajustar al Reglament general de protecció de dades, a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i al que estableix la disposició addicional quarta de la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs, preveient especialment mesures per garantir els drets i llibertats de la persona interessada, la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat, l'autenticitat i la traçabilitat dels accessos a les dades.”

D'entrada valorar positivament la menció expressa a l'aplicació de la normativa de protecció de dades personals en relació amb el tractament de les dades que integren el Registre.

Ara bé, sens perjudici d'això, cal apuntar que la referència a l'adopció de les mesures necessàries per garantir la seguretat de les dades en aquest mateix apartat 1 pot portar a certa confusió, atès que els tractaments de dades s'han d'adequar al conjunt de principis i obligacions establertes a la legislació de protecció de dades. Per això, seria convenient **separar en dos apartats** diferents les previsions establertes en aquest **apartat 1**.

Així mateix, pel que respecte a la part relativa a les mesures i en línia amb allò establert a la DA 4a de la LO 2/2010, seria necessari **incorporar un incís** per fer referència a l'anàlisi de riscos (article 32 RGPD) i a l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades (article 35 RGPD) com a punt de partida per a l'establiment de les mesures tècniques i organitzatives que resultin adients per garantir un nivell de seguretat adequat al risc que pugui comportar el dit tractament de dades.

I també seria convenient **afegir-hi** una referència al responsable del tractament (en aquest cas, el departament competent en matèria de salut (article 1.2 Projecte de decret)), atès que sobre ell recau l'obligació d'adoptar aquestes mesures (article 24 RGPD).

A banda d'això, també es podria **incorporar** una referència a l'Esquema Nacional de Seguretat, tenint en compte que la seva aplicació resultaria obligatòria en el present cas, de conformitat amb la disposició addicional primera de l'LOPDGDD.

Per això, recollint totes aquestes observacions, es proposa **modificar l'apartat 1**, escindint-ne una part per **afegir un nou apartat 2** amb la redacció següent:

"1. El tractament de les dades que integren el Registre s'ha d'ajustar al Reglament general de protecció de dades, a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i al que estableix la disposició addicional quarta de la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs.

2. El departament competent en matèria de salut, abans d'iniciar el tractament, ha de dur a terme l'anàlisi de riscos i l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades per determinar les mesures tècniques i organitzatives adequades. Aquestes mesures han de garantir els drets i les llibertats de la persona afectada, així com la confidencialitat, integritat, disponibilitat, autenticitat i traçabilitat dels accessos a les dades, tenint en compte l'establert al Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat."

Pel que fa a l'actual **apartat 2 de l'article 7** del Projecte de decret, el qual, atesa la redacció abans proposada, hauria de passar a ser un **nou apartat 3**, és important destacar-ne que **no recull** amb exactitud les previsions de l'apartat 11 de la DA 4a de la LO 2/2010.

En aquest sentit, cal tenir en compte que la LO 2/2010 ha exceptuat l'exercici del dret d'oposició de les persones professionals objectores de consciència, atès que el tractament de les seves dades es basa en el compliment d'una obligació legal (article 6.1.c) RGPD), per la qual cosa no operaria aquest dret (article 21 RGPD).

Per això, es proposa la redacció següent per a aquest nou **apartat 3**:

“3. Les persones professionals inscrites en el Registre poden exercir els seus drets en matèria de protecció de dades davant el responsable del tractament, a excepció del dret d’oposició, en basar-se el tractament en el compliment d’una obligació legal, conforme l’article 6.1.c) de l’RGPD.”

Recordar, en aquest punt, que el deure d’informar la persona afectada sobre el tractament de les seves dades en el moment de la seva recollida (a través de la sol·licitud d’inscripció), d’acord amb l’article 13 de l’RGPD, també abastaria informar-la d’aquesta circumstància (que no procedeix el dret d’oposició), sens perjudici del seu dret a revocar la declaració d’objecció.

VIII

A les consideracions fetes fins ara sobre l’articulat del Projecte de decret, cal afegir-ne les següents:

Per una banda, fer notar que no es conté cap previsió respecte la **conservació** de la informació personal recollida per assolir la finalitat a què respon la creació del Registre de persones objectores de consciència.

Tenint en compte que l’objecte del present Projecte de decret és desplegar normativament el mandat de l’article 19 ter de la LO 2/2010, seria bo incloure-hi, si més no, una previsió equivalent a l’establerta a l’apartat 10 de la DA 4a de la mateixa llei.

Per altra banda, fer notar que el tractament que es du a terme amb la creació del Registre de persones objectores de consciència cal que es faci constar en el corresponent **Registre d’activitats del tractament** (RAT), en els termes de l’article 30 de l’RGPD, així com a l’inventari a què es refereix l’article 31 de l’LOPDGDD.

I finalment recordar la necessitat de dur a terme una **anàlisi de riscos i una avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades** per determinar les mesures tècniques i organitzatives adequades al risc que pugui comportar el dit tractament de dades (articles 32 i 35 RGPD).

Conclusió

Examinat el Projecte de decret pel qual es crea i regula el Registre de persones professionals sanitàries objectores de consciència en la intervenció directa en la pràctica de la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE), es considera adequat a les previsions establertes a la normativa sobre protecció de dades personals, sempre que es tinguin en compte les consideracions fetes en aquest informe.

Barcelona, 21 de desembre de 2023

